

HACIA UNA ECONOMÍA DE GUERRA: EL SALVADOR 1982-1983

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
Universidad Centro Americana, El Salvador

1. Introducción

No obstante las esperanzas que se generaran en los sectores y fuerzas en el poder respecto a una recuperación económica en el contexto de las elecciones y conformación del gobierno de unidad nacional, la situación económica del país continuó durante 1982 igual que en los años previos. Toda la evidencia para sugerir que 1983 será, desde una perspectiva puramente cuantitativa, otro año de disminuciones en todos los componentes de la oferta y demanda agregada, con serios desequilibrios en las cuentas de balance interno y externo y, lo más preocupante de todo, de una ampliación y profundización de la miseria de los sectores populares.

El deterioro económico de 1982 y la casi segura continuación del mismo patrón durante 1983 constituyen dos eslabones más de una larga cadena de descensos que comienza en 1979, que reflejan la presencia de las mismas causas que provocaron las contracciones en el período 1979-1981 y, consecuentemente, tendrán algunos efectos similares. Al igual que en el período 1979-1981, continuaron operando fuerzas adversas a la actividad económica sobre las que el país y el gobierno no tienen control: poco dinamismo de la economía mundial, la situación financiera internacional y los deprimidos mercados mundiales de productos básicos y, finalmente, los problemas de las economías centroamericanas y la desarticulación del Mercado Común Centroamericano.

No obstante las similitudes cuantitativas, los años 1982 y 1983 son diferentes ya que apuntan a cambios cualitativos en el carácter de la economía nacional, con profundas implicaciones políticas. A nuestro juicio, los sucesivos deterioros cuantitativos del período 1979-1981 han culminado en estos dos años en un retroceso cualitativo en la capacidad productiva del país y las condiciones de vida de la población. Junto a ello, la prolongación de la confrontación bélica ha llevado a un cambio en el carácter de la economía salvadoreña: de

una economía en guerra, es decir, afectada en forma directa e indirecta por la confrontación, se ha pasado a una economía de guerra, en la cual la política económica del régimen y una parte sustancial de los recursos económicos y financieros nacionales se intentan poner en función y se instrumentalizan en favor de la estrategia político-militar que busca la victoria de los sectores y fuerzas en el poder.

Los intentos de convertir a la economía salvadoreña en una economía de guerra no han significado la más mínima ventaja en términos de reactivación, mayor producción o mayor utilización de la fuerza laboral. Muy por el contrario, la militarización de la política económica y la instrumentalización de la misma en favor del esfuerzo de guerra en contra del FDR-FMLN han hecho surgir nuevas, o bien han acentuado contradicciones y fuerzas presentes desde 1979 y que habían influido en el deterioro de los años anteriores.

Tal como se ha señalado en diversas publicaciones, la causa principal del deterioro económico experimentado durante el período 1979-1981 reside en la guerra, no sólo porque afecta directamente la producción y el comercio, sino también porque aumenta los riesgos e incertidumbres. Los desarrollos ocurridos en los quince meses posteriores a las elecciones y de manera especial en la etapa posterior a la ofensiva de octubre de 1982 del FMLN, han disipado casi totalmente los optimismos, ilusiones y esperanzas. En tanto que la guerra no sólo continuó durante 1982 sino que se amplió y profundizó, la crisis económica se mantuvo y adquirió características aún más preocupantes. De igual manera, la ampliación y profundización de la confrontación y los giros favorables al FMLN que tomó, limitaron tremendamente las posibilidades del régimen salvadoreño de articular una economía de guerra.

Previo a octubre de 1982 existía lo que algunos observadores han dado en llamar un "equilibrio dinámico" o empate entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del FMLN. Esta situación, unida a la falta de acciones de envergadura después de las elecciones de marzo, permitió una ligera recuperación de confianza por parte de la empresa privada. Sin embargo, a partir de octubre se detecta una clara tendencia de importantes cambios en la situación logística coyuntural del FMLN, en el número de sus hombres armados, en su capacidad de fuego, en el desarrollo de sus instrumentos y en la amplitud y grado de control de territorio (CUDI, 1983: 37-49). Los avances y victorias del FMLN, junto a una falta de éxitos o avances militares de las Fuerzas Armadas y el proyecto que impulsan, tienen profundas consecuencias económicas. La empresa privada nacional y el capital extranjero parecen percibir riesgos e incertidumbres que, dada su racionalidad empresarial, los obliga a no repatriar su capital, no arriesgar fondos propios y,

aunque obtengan fondos ajenos en préstamo, no realizan inversiones que impliquen un compromiso mayor a unos cuantos meses. En este sentido, los empresarios salvadoreños, especialmente los grandes, no parecen estar colaborando o sacrificando mayor cosa para reactivar la economía nacional y/o contribuir al esquema de una economía de guerra diseñado por el régimen salvadoreño: por el contrario, los grandes empresarios salvadoreños tienen comportamientos y actitudes que, desde la perspectiva del gobierno y las Fuerzas Armadas, pudieran catalogarse como antipatrióticos y de boicot al esfuerzo de guerra en contra del FDR-FMLN.

El comportamiento de la economía salvadoreña durante 1982 y las perspectivas para 1983 se han visto afectadas también por fenómenos naturales, especialmente por la sequía de julio-agosto de 1982, el temporal de septiembre y la tardanza en las lluvias del invierno de 1983. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, los efectos combinados de los fenómenos ocurridos el año pasado son devastadores en términos de la cosecha 1982-1983. Los porcentajes de cosecha perdidos alcanzan 40% para el maíz y el maicillo, 50% para el frijol, 30% para arroz y algodón, 20% para café y, finalmente, 10% para caña. Aproximadamente dos millones de cafetos fueron destruidos en las zonas de Jayaque, Talnique, Los Naranjos, Las Cruces, Santiago de María, San Miguel, Berlín y Ataco. Las mismas fuentes señalan que la disminución en ingresos agrícolas para 1982 y 1983 será, en conjunto, de 600 millones de colones. Las pérdidas en activos fijos originados solamente por el temporal se elevan a 70 millones de colones. (Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 1982: 5-6.)

2. Situación actual y perspectivas

El análisis de los sucesos ocurridos durante 1982 y los primeros cinco meses de 1983 permite hacer algunas predicciones cuantificadas de la actividad económica, las cuales se presentan en el cuadro 1. El Producto Interno Bruto declinó en casi 6% durante 1982 y según nuestras propias estimaciones durante 1983 caerá en casi 8%; de ser así, la producción de bienes y servicios habrá disminuido en 29.4% en el período 1979-1983. Es importante señalar que los once sectores que forman la estructura económica nacional experimentaron disminuciones durante 1982 y según nuestras proyecciones ocurrirán nuevas y mayores contracciones durante 1983. Los principales sectores disminuirán su actividad a tasas mayores que las observadas el año

pasado. A manera de ejemplo: el sector agrícola disminuyó su producción durante 1982 en 7.4% y durante el presente año se contraerá en 8.7%; la manufactura aumentará su tasa de disminución desde el 5.9 hasta el 12.5%; el sector de transporte y comunicaciones se redujo en 6.5% en 1982 y se espera una contracción de 18.8% en 1983; finalmente, el comercio disminuyó su actividad en 4.7% en 1982 y podría disminuir en 7.0% en el presente año.

Dentro de los diversos sectores económicos, el agropecuario será de los más afectados durante 1983, lo cual adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta el papel que desempeña en la economía salvadoreña como fuente generadora de empleo, divisas y productos básicos. Aun sin tener en cuenta los fenómenos atmosféricos, las perspectivas de este sector son francamente desoladoras. De continuar las tendencias observadas durante los dos últimos años, la producción agrícola de casi todos los productos de exportación y granos básicos disminuirá en 1982 a tasas que oscilan entre 10 y 20% y, respecto a 1979, la producción agrícola habrá disminuido entre 25 y 50% (véanse los cuadros 2, 3 y 4).

Sin intentar realizar una identificación exhaustiva de las causas del descalabro agrícola, se pueden mencionar como factores importantes: la ampliación de la guerra y la pérdida de control de amplios territorios por parte de las Fuerzas Armadas, la actitud de boicot de los grandes terratenientes y, probablemente, la mala administración de la Reforma Agraria. Es también un factor importante para explicar las disminuciones en la actividad agropecuaria la falta de confianza que los agricultores y, en general, la empresa privada, han comenzado a desarrollar en el actual proyecto político, en la estrategia militar y en las Fuerzas Armadas. Esto, a nuestro juicio, es lo que parece sugerir las disminuciones observadas en áreas sembradas y también en rendimientos.

La situación del sector agropecuario es, igualmente, deprimente. Según estimaciones del Banco Mundial, durante el período 1979-1984 se sacrificaron 832 000 cabezas de ganado bovino, de tal manera que el hato nacional estaba reducido a 1.1 millones de cabezas al finalizar 1982. El ritmo de sacrificios parece haberse incrementado en los primeros cinco meses del presente año; según informaciones de la prensa nacional, al concluir mayo el hato estaba reducido a sólo 900 000 de las cuales 50% pudieran carecer de control efectivo por parte de sus propietarios por motivos de la guerra (Banco Mundial, 1983: 23, 67-68).

La producción de leche se ha visto afectada por la guerra y demás factores que inciden en la crisis económica. Según el Banco Mundial, en 1979 se produjeron 407 millones de litros de leche, mientras que

CUADRO I
OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
DEMANDA GLOBAL	4 884.9	4 727.2	4 172.7	3 794.9	3 485.6	2 140.1
<i>Consumo</i>	3 307.6	3 213.8	3 021.6	2 792.0	2 623.8	2 466.4
Privado	2 882.9	2 777.2	2 588.4	2 378.7	2 219.9	2 071.2
Público	424.7	436.6	433.2	413.3	403.9	395.2
<i>Inversión Interna Bruta</i>	857.6	533.4	293.5	315.8	276.0	241.2
<i>Formación de capital fijo</i>	755.2	601.3	371.0	337.3	261.2	127.6
Privado	515.4	365.2	161.1	144.5	135.8	113.6
Público	239.8	236.1	209.6	192.8	125.4	
<i>Variación de existencias</i>	102.3	67.9	77.5	21.5	14.8	
<i>Exportación de bienes y servicios</i>	719.6	979.9	857.6	687.1	585.8	432.8
OFERTA GLOBAL	4 884.9	4 727.2	4 172.7	3 794.9	3 485.6	3 140.1
<i>Importación de bienes y servicios</i>	1 220.7	1 125.6	893.7	827.5	677.7	555.1
<i>Producto Interno Bruto</i>	3 664.2	3 601.6	3 279.0	2 967.4	2 807.9	2 585.0
Agropecuario	856.6	887.3	844.0	758.6	702.6	641.5
Minería y canteras	3.6	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7
Industria manufacturera	691.4	663.8	557.9	470.0	442.3	387.0
Construcción	165.2	141.5	92.6	91.4	80.7	75.0
Electricidad, agua y servicio sanitario	96.6	103.7	101.7	98.4	94.5	90.7
Transporte, almacenaje y comunicación	223.3	208.7	193.7	170.8	159.7	129.0
Comercio	819.2	778.9	690.9	594.7	566.9	527.2
Financiero	103.8	106.0	97.0	-94.0	92.7	90.6
Propiedad de viviendas	122.5	126.8	130.0	131.9	131.8	129.5
Administración pública	310.9	322.7	332.0	339.9	331.3	320.6
Servicios personales	270.6	258.0	235.3	213.9	201.6	190.2
Deflactor implícito						
del PIB	209.9	239.3	272.8	296.1	326.1	

FUENTE: Banco Central de Reserva, Sección de Cuentas Nacionales, Estadísticas Internas, 1983.

CUADRO 2

DISMINUCIONES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESTIMADA
EN 1983 RESPECTO A LAS PRODUCCIONES DE 1979 Y 1982

<i>Producto</i>	<i>respecto a 1982</i>	<i>respecto a 1979</i>
Café oro	-13.0%	-36.0%
Algodón oro	-7.0%	-41.0%
Frijol	-13.5%	-38.3%
Arroz granza	-19.2%	-48.9%
Maíz	-11.1%	-25.0%
Maicillo	-13.1%	-36.0%
Caña de azúcar	0.3%	-30.5%

FUENTE: Banco Central de Reserva, "Programa Monetario 1983", San Salvador, 1982, cuadros 6-9.

en 1981 la producción alcanzó solamente 342 millones de litros (*ibid.*). La producción de leche para 1983, suponiendo una continuación de las tendencias reportadas por el Banco Mundial, sería sólo de 284 millones de litros; esta cifra representa, a nuestro juicio, una sobrestimación.

Durante 1982 la oferta global de bienes y servicios se contrajo en 8.2% y en 1983 ocurrirá una nueva disminución del 10%, cifra que es mayor que cualquier otra del período 1979-1982, con la única excepción de 1980. Es importante señalar que las disminuciones de la oferta en estos dos últimos años reflejan, por un lado, disminuciones en la producción nacional de bienes y servicios y, por otro, disminuciones en importaciones. En ambos años, la oferta real de productos importados se ha reducido en 18%, reflejando la escasez de divisas, la devaluación de hecho, impuesta por medio del llamado mercado paralelo y la priorización de importaciones relacionadas con el esfuerzo de guerra o requeridas para mantener a flote el proyecto político y el gobierno de unidad nacional.

Los diferentes componentes de la demanda agregada experimentaron comportamientos igualmente deprimidos durante 1982: el consumo privado disminuyó en casi 7%, la inversión interna bruta se redujo en 12.6%, la formación de capital fijo por parte del sector público se redujo en un impresionante 35% y las exportaciones de productos salvadoreños al mercado centroamericano y al resto del mundo disminu-

CUADRO 3
 ÁREAS SEMBRADAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PARA LOS
 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 1979-1983

Año	Café Oro			Algodón Oro			Caña de Azúcar		
	Área (mz)*	Produc. (qq)*	Rendim. (qq/mz)	Área (mz)*	Produc. (qq)*	Rendim. (qq/mz)	Área (mz)*	Produc. (qq)*	Rendim. (qq/mz)
1979	296.7	4 125	13.9	128.2	1 410	11.0	50.7	3 321	65.5
1980	296.7	4 094	13.8	112.5	1 350	12.0	44.9	2 564	57.0
1981	297.0	3 475	11.7	75.2	948	12.6	41.0	2 248	54.8
1982	296.4	3 023	10.2	71.2	883	12.4	41.8	2 300	55.0
1983**	295.7	2 632	8.9	67.4	822	12.2	41.9	2 308	55.0

* Cifras en miles.

** Calculado suponiendo tendencias similares al período 1981-1982.

FUENTE: *Ibid.*

CUADRO 4
 ÁREAS SEMBRADAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS
 PARA GRANOS BÁSICOS 1979-1983

Año	Maíz			Frijol			Arroz			Maicillo		
	Área (mz)*	Produc. (qq)*	Rendim. (qq/mz)	Área (mz)*	Produc. (qq)*	Rendim. (qq/mz)	Área (mz)*	Produc. (qq)*	Rendim. (qq/mz)	Área (mz)*	Produc. (qq)*	Rendim. (qq/mz)
1979	394.1	11 392	28.9	78.9	10 000	12.8	21.1	1 266	60.0	205.0	3 485	17.0
1980	417.2	11 473	27.5	73.4	8 520	11.6	24.0	1 320	55.0	170.0	3 041	17.8
1981	414.8	10 868	26.2	71.1	8 320	11.7	19.8	1 000	50.5	164.8	2 950	17.9
1982	404.2	9 660	23.9	69.9	7 200	10.3	19.0	800	42.0	160.3	2 565	16.0
1983**	393.8	8 585	21.8	68.7	6 230	9.0	18.3	646	35.3	155.9	2 229	14.3

* Cifras en miles.

** Calculado suponiendo tendencias similares al período 1981-1982.

FUENTE: *Ibid.*

veron en 14.7%. La reducción en inversiones fijas por parte del gobierno central es importante, ya que señala no tanto la escasez de recursos como la casi nula capacidad de ejecución del gobierno, resultante de la ampliación de la guerra y pérdida de control de amplios territorios de la geografía nacional. La situación habrá ciertamente de empeorar en 1983: las exportaciones pudieran reducirse en un 26%; el consumo privado, ya reducido a niveles verdaderamente primitivos e inaceptables, puede disminuir entre 6 y 7%. Las disminuciones en la formación de capital fijo del sector privado y público se reducirá según las proyecciones, en 6 y 9.4%, respectivamente (*ibid.*: 1-13, Banco Central de Reserva, 1982: cuadro 1).

Es necesario señalar que existen otras proyecciones cuantificadas de la situación para 1983; el Banco Central tiene al menos dos conjuntos de proyecciones, correspondiendo a escenarios que ellos llaman "optimista" y "pesimista". El primero de éstos contempla como optimista el estancamiento de la producción nacional en el nivel observado durante 1982; el segundo —el pesimista— asume una disminución de la producción nacional, medida ésta por el Producto Interno Bruto, de 3.1%. Cabe señalar que las proyecciones del Banco Central son, tanto la pesimista como la optimista, tremendamente irreales, ya que suponen o requieren cambios radicales en las condiciones y comportamientos que determinan la economía salvadoreña. Entre estos supuestos, el Banco Central supone implícitamente una mejora en las condiciones de seguridad o, lo que es lo mismo, una correlación de fuerzas favorable a las Fuerzas Armadas que le permita empujar al FMLN lejos de las zonas económicamente importantes (Banco Central de Reserva, 1982:1-11).

Es interesante mencionar que las proyecciones del Banco Mundial, una institución menos comprometida con el proyecto político-militar que se impulsa en El Salvador, difieren radicalmente de las elaboradas por el BCR. Según esta institución,

las perspectivas de crecimiento para el futuro inmediato son escasas. Todos los sectores principales declinaron durante 1982; en tanto que la producción continuará afectada adversamente por la guerra civil, escasez de crédito y divisas [...] probablemente no ocurrirá ninguna recuperación durante 1983. Suponiendo un mejoramiento en las condiciones de seguridad, el restablecimiento de la confianza del sector privado y la continuación de la ayuda exterior [...] la economía pudiera comenzar a revertir sus tendencias en 1984 y recuperarse en 1985. Por supuesto, bajo las circunstancias actuales, cualquier pronóstico es altamente incierto. Otros escenarios son igualmente plausibles; pudiera, por ejemplo, continuar la violencia durante los próximos dos o tres

años, continuando las tendencias depresivas en la economía y, consecuentemente, volviéndose necesario un flujo mayor de ayuda financiera. (Banco Mundial, 1983: 30-31).

Sobre estas bases el Banco Mundial proyecta para 1983 una contracción en la actividad económica del 6.7%; la inversión pública y privada disminuirán en más del 3.3% y las exportaciones, medidas a precios constantes, se reducirán en 7.5% y ocurriría una reducción del 21% en los ingresos de divisas por exportaciones de café (Banco Mundial, 1983: 30-39; apéndice estadístico: cuadros 2-7, 2-8, 3-7).

3. Las principales características

En el contexto de una economía en retroceso y con funcionamiento cada vez más entumecido, se han comenzado a perfilar en el transcurso de 1982 y de manera especial en el periodo enero-mayo de 1983 las siguientes características, que parecen ser las dominantes y dinamizadoras de la coyuntura: en primer lugar, la economía opera con crecientes estrangulamientos en su sector externo y financiero, los cuales no hacen crisis por la creciente intervención estadounidense: las condiciones socioeconómicas de las mayorías populares han alcanzado niveles primitivos e inaceptables; sin embargo, el aliviar este problema no parece constituir prioridad en el momento de formular políticas y asignar recursos. De la misma manera que los problemas inmediatos de los sectores populares son de carácter secundario, las reformas —consideradas como el mecanismo para resolver los problemas fundamentales— han perdido toda dinámica, marchando en varios aspectos en retroceso. Unido a lo anterior, se puede señalar como característica importante la instrumentalización de lo económico en función de la guerra.

3.1. *El esquema de economía de guerra*

Después de casi dos años de creciente enfrentamiento militar, periodo durante el cual las Fuerzas Armadas han sufrido no pocos reveses y el FMLN-FDR ha realizado sustanciales avances políticos y militares, el régimen salvadoreño y Estados Unidos se han visto en la necesidad de concebir una estrategia unificada e integral que ponga todas las fuerzas y áreas de la vida social en función de su proyecto

político y principalmente de su objetivo estratégico: aniquilar al movimiento revolucionario y subordinar a la oposición democrática. Es en este contexto que se desarrolla, a partir de 1982, una concepción no explicada públicamente, aunque no por eso menos real, de una economía de guerra. Las únicas declaraciones públicas y oficiales que pudieran dejar entrever que dicha concepción existe son las del general Vides Cananova, actual ministro de Defensa.

En tiempos de guerra como los que vive El Salvador, los regímenes en el poder se han planteado como tarea fundamental y necesaria para la concreción de sus objetivos militares la reasignación de recursos reales y financieros hacia la satisfacción de las necesidades militares, concebidas en el amplio sentido de la palabra. Estas necesidades incluyen no sólo los recursos directamente necesarios para el combate armado, sino también para sostener y consolidar las alianzas políticas que sirven como base de apoyo para la guerra.

En El Salvador, la construcción de una economía de guerra a partir de 1982 ha implicado poner a disposición de la maquinaria bélica, el dinero necesario para comprar fusiles y municiones, así como los apoyos políticos y cohesiones institucionales necesarias y no obtenibles gratuitamente o por medio de coerción.

Desde una perspectiva teórica y en los momentos de optimismo de principios de 1982, la política económica del régimen salvadoreño tuvo como objetivos fundamentales y necesarios para el esfuerzo de guerra, primero, lograr incrementos en la producción y, segundo, la disminución o restricción de la demanda por parte de la población civil; finalmente se definió como objetivo el eliminar las fricciones con la empresa privada, especialmente con el gran capital ya que este sector constituye la base principal de sustentación del proyecto político y el esfuerzo de guerra.

El objetivo de incrementar la producción de bienes y servicios no parece haberse conseguido, a juzgar por los descensos en la producción durante 1982 y el proyectado para el presente año.

Estos fracasos en la política económica de guerra reflejan, en gran medida, la incapacidad de las Fuerzas Armadas de lograr avances que estimulen la confianza de la empresa privada y aislen la guerra a territorios económicamente insignificantes. Es probable también que el régimen se haya percatado de que los incrementos en la producción no tienen gran importancia, en términos militares, ya que El Salvador no posee una estructura capaz de producir los bienes y servicios necesarios para la guerra, que contribuyan a incrementar la oferta agregada militarizable. Incrementar la producción tampoco es necesario para mejorar las relaciones con la empresa privada, ya que ésta parece haber encontrado una forma de obtener ganancias de manera

rápida y sin ningún riesgo; obteniendo créditos en moneda nacional, convirtiéndolos a dólares, depositándolos en el exterior y, finalmente, entrando en mora. La clave, por así decirlo, para eliminar las fricciones con la gran empresa privada no está en la producción, sino en una política liberal y tolerante de asignación de crédito y divisas. Desde la única perspectiva que se podría considerar necesaria la reactivación económica, es para tratar de comprar la lealtad política de los sectores populares y aislar al movimiento revolucionario; sin embargo, esto choca con las realidades estructurales de la economía salvadoreña que hacen que ni siquiera en tiempos de paz la actividad productiva o los incrementos en la misma signifiquen bienestar popular. Adicionalmente, es necesario recordar que en El Salvador las lealtades políticas de los sectores populares siempre se han tratado de obtener mediante la coerción y represión.

Por todo lo anterior, para la economía de guerra que surge a partir de 1982, la reactivación económica ya no es vital, militarmente hablando, aunque tampoco carece de importancia. Probablemente, lo que interesa no es la producción o la oferta en general, de todo o cualquier tipo de productos, sino la oferta agregada militarizable, generada primordialmente por importaciones. A nivel de la producción nacional, se vuelve importante el incremento de la producción exportable, de tal manera que se pueda alimentar el apetito creciente de divisas por parte de la maquinaria de guerra. El resto de la producción nacional, aquella destinada a satisfacer las necesidades y otros tipos de consumo de la población, interesa sólo en tanto no genere conflicto con los otros objetivos de incrementar la porción de la oferta disponible para la guerra y recuperar el apoyo de la empresa privada, severamente dañado por los intentos de reformas por parte de la Democracia Cristiana y algunos pocos miembros de las Fuerzas Armadas.

Obviamente, si se trata de aumentar la porción de la oferta agregada destinada a la guerra es necesario disminuir la demanda de la población civil, requisar —por así decirlo— parte del ingreso disponible a la población y trasladarlo al Estado. La lógica de este objetivo es sencilla y fue formulada bastante explícitamente por uno de los principales teóricos de la economía de guerra, el economista inglés Arthur Cecil Pigou, que hace cuarenta años dijo: “obviamente, si las personas comen menos, viajan menos, visitan menos teatros, usan menos trabajadores domésticos... liberan recursos... para satisfacer las necesidades de guerra del Estado”. (Pigou, 1952: 364-372). El régimen salvadoreño parece haber concebido con toda claridad esta necesidad, especialmente a partir de la conformación del gobierno de Unidad Nacional y, tal como se verá en las páginas siguientes, ha hecho uso de las fórmulas y recomendaciones clásicas de lo que se puede llamar la teo-

ría económica para la guerra. En forma esquemática, se pueden identificar claramente los métodos para restringir la demanda, requisar los ingresos del pueblo y aumentar la oferta agregada militarizable (*ibid.*; The Council of Economy Advisers, 1952: 357-364).

a) Absorción de ingresos privados mediante impuestos reduciendo los ingresos de consumidores y empresarios, según las proporciones que política y militarmente convengan. Dentro del arsenal de impuestos, los teóricos de la economía de guerra priorizan el uso de los impuestos indirectos, los generales y específicos al consumo.

b) Restricciones en la oferta de créditos, tanto de los destinados a la empresa privada para producción no prioritaria como de los destinados para otros propósitos.

c) Controles directos y asignaciones específicas de aquellos recursos necesarios para lograr los incrementos en la oferta agregada. Se trata, en el caso salvadoreño, no tanto de materias primas o insumos como de divisas.

d) Políticas restrictivas del ingreso de la población, especialmente mediante el control o congelamiento de los salarios.

e) Reducciones en los volúmenes de inversión tanto del sector público como privado en todos aquellos proyectos no necesarios para la guerra.

f) Control directo de todos aquellos inventarios o fuentes de aprovisionamiento de productos útiles para el esfuerzo de guerra, es decir, granos básicos, comestibles en general, medicinas, etcétera.

g) Ayuda extranjera en bienes o servicios que aumenten la oferta agregada militarizable o bien el endeudamiento externo en condiciones que permitan lograr el mismo objetivo.

3.2 *El estrangulamiento externo*

Durante 1982 y en lo que va de 1983 se ha percibido una situación de estrangulamiento en el sector externo de la economía salvadoreña, manifestada en problemas de balanza de pago, decaimiento de reservas y escasez de divisas; cabe señalar que las proyecciones oficiales y nuestros propios estimados hacen prever que este problema continuará caracterizando y determinando el futuro inmediato. Durante 1982 la economía salvadoreña tuvo un faltante de divisas, medido por la balanza en cuenta corriente, de 693 millones de colones y, según las proyecciones del Banco Central, durante 1983 habrá un faltante de casi 800 millones. La situación pudiera ser aún peor en 1983 dependiendo de factores difíciles de predicir y sobre los cuales el

gobierno salvadoreño tiene poca capacidad de control; el mismo BCR estima que el faltante de divisas pudiera elevarse a 800.7 millones de colones. Paralelo al deterioro de la balanza en cuenta corriente han ocurrido deterioros adicionales en los niveles de reservas internacionales netas: en 1982 las reservas netas disminuyeron en casi 125 millones de colones y en el 1983 se espera una caída adicional que pudiera oscilar entre los 120 y 200 millones de colones. Es importante recordar que 1978 fue el último año en que las reservas experimentaron variaciones positivas, alcanzando, al concluir dicho año, un nivel de 586 millones de colones; a partir de entonces las reservas han disminuido en 270 millones de colones en 1979, 490 en 1980, 198 en 1981, tal como ya se indicó, 122 millones en 1982 y como mínimo 121 millones en 1983. Al concluir 1983 el nivel de reservas internacionales netas de El Salvador será, en el mejor de los casos, de 617 millones (Banco Central de Reserva, 1982: cuadro 10; 1983).

Reflejo de la escasez de divisas son los diversos problemas que la empresa privada enfrentó y planteó con gran vehemencia al gobierno salvadoreño durante 1982, al punto de debilitar el esquema de unidad nacional. A finales del año pasado la prensa nacional informó sobre incumplimiento en el pago a proveedores europeos de medicinas y materias primas para la industria químico-farmacéutica, la Cámara de Representantes Comerciales señaló y protestó por los problemas provocados por la falta de divisas para la actividad comercial, los importadores de maquinaria y equipo manifestaron estar en bancarrota y voceros de la empresa privada amenazaron con nuevos cierres de empresas. Los sectores que parecen más afectados son el comercio y la industria, concentrándose los efectos y el consecuente malestar en la gran empresa propiedad de la oligarquía nacional y del capital extranjero, ya que son estas empresas las que tienen los mayores requerimientos de importaciones para su funcionamiento. A partir de 1982 la escasez de divisas se ha vuelto un problema más agudo ya que las pocas existencias están siendo asignadas, en primer lugar, a la guerra y, en segundo lugar, se destinan a la importación de productos alimenticios cuya falta se ha agudizado con la crisis económica. Finalmente, la escasez se está agudizando a raíz de la fuga de capitales que viene realizando la empresa privada por motivo precausionario y falta de confianza en la viabilidad del proyecto político (Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 1982: 10-11).

En 1982 se destinaron 653 millones de colones a importar bienes de consumo, especialmente productos alimenticios. Según el Banco Mundial, la importación de estos productos en el último año alcanzó la cifra de 500 millones de colones. Para 1983 las importaciones de bienes de consumo alcanzarán los 665 millones (Banco Mundial,

1983: 70-82, apéndice estadístico: cuadros 3-6, 7-20; Banco Central de Reserva, 1982). Al mismo tiempo, la economía salvadoreña se ha visto obligada a destinar una porción considerable de sus divisas a la importación de petróleo para mantener funcionando el sistema de generación de energía eléctrica fuertemente golpeado por los sabotajes. En 1977 las importaciones de productos derivados del petróleo fueron de 181 millones de colones, para 1982 se importó casi 358 millones y en 1983 la cifra podría sobrepasar los 400 millones. Las importaciones de estos productos ocupan un lugar prioritario en la asignación de divisas, ya que en caso contrario ocurriría una mayor parálisis económica y una hambruna generalizada; todo lo cual traería consecuencias políticas muy graves que pudieran incluso perjudicar la ya debilitada capacidad de las Fuerzas Armadas de realizar la guerra (*ibid.*).

El problema de divisas como resultado de la fuga de capitales se agravó durante 1982; según el Banco Central, el 25.8% de los ingresos de divisas por concepto de exportaciones fue retenido por sus propietarios en el exterior; los porcentajes de retención eran de sólo 18% en los años de preguerra. Estimados independientes señalan que la fuga de capitales por medio de retención de ingresos de exportaciones durante el período 1979-marzo de 1982, asciende a 1 961 millones. La sobrevaloración de las importaciones es otro mecanismo mediante el cual se fugaron considerables sumas de recursos; según el Banco Central, en 1982 aproximadamente el 41% de las importaciones provenientes del área centroamericana constituían valores artificialmente inflados por la empresa privada salvadoreña para sacar recursos y retenerlos en el exterior en previsión de eventos políticos y militares inaceptables para ellos (Junta Monetaria, 1982).

Uno de los efectos más graves de la falta de divisas es el producido sobre el *stock* o acervo de capital, ya que no se importa maquinaria ni equipo, ni siquiera para remplazar el dañado por la guerra y deteriorado en forma natural durante el proceso de producción. Puesto que la inversión bruta en activos fijos no alcanza a cubrir la depreciación, se abren posibilidades de daño permanente, o al menos que requerirán muchos años para ser corregidos. Algunos datos que ilustran la magnitud del problema señalado han sido revelados por el Banco Mundial: durante el período 1979-1981 no se realizaron inversiones en los sectores de la industria, construcción, electricidad, transporte, comercio y servicios; es probable que la falta de inversiones en estos sectores haya continuado durante 1982-1983. Lo anterior significa que la cantidad total de activos fijos, es decir maquinaria y equipo disponible a los sectores arriba mencionados, puede haber disminuido conservadoramente en 41%, suponiendo una tasa de depreciación de 10% y sin incluir los efectos del sabotaje y

enfrentamientos militares. Aunque la guerra terminara en estos momentos, la capacidad productiva de la economía salvadoreña no podría ya recuperar sus niveles de preguerra por falta de maquinaria y equipo (Banco Mundial, 1983: apéndice estadístico, cuadros 2-6).

En el plano político todo lo anterior tiene profundas implicaciones y genera grandes contradicciones del gobierno salvadoreño con la empresa privada. Por lo cual Estados Unidos procedió a diseñar en 1982 una estrategia que evitara el agravamiento y las consecuencias políticas de la falta de divisas. En el corto plazo se procedió a bombear cantidades masivas de dólares, especialmente bajo la forma de financiamiento compensatorio o de emergencia. Es importante señalar que por "financiamiento autónomo" se entiende los flujos de ingresos y egresos de divisas experimentados por un país como resultado de la libre y voluntaria decisión de empresarios y otros agentes económicos; en cambio, los financiamientos "compensatorios" o de "emergencia" son los que obedecen a la necesidad de rescatar o salvar a una economía que no tiene ni genera las divisas que necesita (Meade, 1963: 11-12; Johnson, 1976: 48).

En 1981 la economía salvadoreña requirió de 864 millones de colones en divisas por concepto de financiamiento externo, las cuales se destinaron fundamentalmente para importaciones y pago de deudas; es importante señalar que en este año solamente el 25% del financiamiento tuvo carácter de emergencia, es decir, compensatorio. Para 1982 la situación cambió cuantitativa y cualitativamente, se requirió financiamiento externo por 1 140 millones de colones, 32% más que el año anterior; sin embargo, el cambio más importante registrado ese año fue el incremento en el financiamiento compensatorio o de emergencia, del cual aproximadamente 49% correspondió a esta categoría. Para el año en curso, el Banco Central proyecta que será necesario contar con 1 155 millones de colones para cubrir los faltantes de divisas; de ese total, el 52% corresponde a recursos obtenidos y otorgados con carácter de emergencia. Todo este incremento en los flujos de divisas a la economía salvadoreña es el resultado del incremento en los préstamos y donativos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de Estados Unidos y, a la vez, de otros organismos en los cuales Estados Unidos tiene un gran poder de persuasión: Fondo Monetario Internacional, Banco Inter-Americano, Banco Mundial, Banco Centroamericano y diversos bancos privados (véase cuadros 5 y 6).

La estrategia diseñada por Estados Unidos y el gobierno salvadoreño para hacer frente en el mediano plazo a la escasez de divisas y el estrangulamiento externo, tiene como punto principal la devaluación del colón. Esta medida parece inevitable si se tiene en cuenta la limitada efectividad de las otras medidas y los compromisos bajo presión

CUADRO 5
FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA ECONOMÍA
SALVADOREÑA 1981-1983*
(en colones)

	1981	1982	1983
Financiamiento no compen- satorio (autónomo)	646.4	586.4	550.3
Capital oficial	359.5	337.5	357.3
Capital bancario	286.9	248.9	193.0
Financiamiento compensa- torio	217.6	554.2	605.1
<i>Total</i>	<i>864.0</i>	<i>1 140.6</i>	<i>1 155.4</i>

* Las cifras en colones se han calculado con base en una tasa de cambio de 2.50 por dólar. Actualmente la tasa de cambio paralelo oscila entre 4.85 y 5.15 colones por dólar.

FUENTE: Banco Central de Reserva, Sección de Cuentas Nacionales. Estadísticas Internas, 1983.

realizados por el gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 1982: 5-6). La devaluación parece también inevitable si se tiene en cuenta la necesidad política del gobierno salvadoreño y Estados Unidos de beneficiar y complacer a los sectores principales del capital nacional; al devaluarse les podrá incrementar los ingresos en moneda nacional a los diversos sectores de la empresa privada vinculados a la exportación y también se beneficiará a los industriales al elevar los precios de la competencia.

Es importante señalar que tanto a corto como a largo plazo existen dos poderosos factores que hacen difícil, si no imposible, aliviar el estrangulamiento de divisas; en primer lugar, la desconfianza y "mentalidad de naufragio" que prevalece en la empresa privada, convirtiendo la economía nacional en una bolsa rota: divisa que entra, divisa que se fuga. La falta de confianza de la empresa privada está basada en factores reales tales como los fracasos o falta de progreso militares por parte de las Fuerzas Armadas y los golpes militares del FMLN. El segundo factor es el sabotaje por parte del FMLN.

CUADRO 6
LISTADO PARCIAL DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO 1982-1983*
(en millones de colones)

<i>Fuente</i>	<i>1982</i>	<i>1983</i>
FOCEM	16.2	—
FIVE	75.0	60.4
BCIE	8.0	0.5
Chase Manhattan	25.0	—
Banco de México	45.4	60.4
Lloyds Bank	27.4	—
Marine Midland	6.0	—
Manufacturers Hannover	40.2	—
Capital Bank	7.1	—
Bank of America	32.2	—
BID	32.5	100.0
CCC (neto)	46.0	39.7
Bonos dólares	50.0	50.0
Banco Central de Venezuela	25.0	—
ESF-AID	250.0	307.5
PL 480 Title II (AID)	18.5	49.2
PL 480 Title I (AID)	67.5	93.0
FMI (neto)	168.7	42.3
AID (otras partidas)	103.5	—
Otras fuentes	96.4	352.4
<i>Total</i>	<i>1 140.6</i>	<i>1 155.4</i>

*Las cifras en colones se han calculado con base en una tasa de cambio de 2.50 por dólar. Actualmente la tasa de cambio paralelo oscila entre 4.85 y 5.15 colones por dólar.

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador.

3.3 Estrangulamiento financiero

Después de las elecciones de marzo de 1982, se observa también un creciente estrangulamiento financiero que tiene sus manifestaciones principales en los déficit experimentados por el gobierno central y su creciente financiamiento con recursos del Banco Central; de igual manera, el estrangulamiento financiero interno se manifiesta en la falta, según patrones históricos, de créditos a la empresa privada.

La situación financiera del gobierno ha venido deteriorándose desde 1979, alcanzando niveles extremadamente críticos en 1982. Por un lado, los ingresos del gobierno se han estancado y, en algunos casos, se han visto reducidos, mientras los gastos de carácter imprescindible, aquellos vinculados a la guerra, se han incrementado. Como resultado, los déficits se han incrementado rápidamente: 109 millones de colones en 1979, 393 en 1980 y 512 millones en 1981. Para 1982 el resultado financiero del presupuesto del gobierno central fue un déficit mayor de 688 millones de colones y para 1983 las proyecciones más optimistas sugieren un nuevo déficit de más de 633 millones (CIDAI, 1983).

Una buena porción de los déficits gubernamentales surgen de la guerra, a pesar de la ayuda masiva de Estados Unidos para tales propósitos y de los cada vez mayores requerimientos financieros de la misma, tanto en divisas como en moneda nacional. Al respecto son ilustrativos los siguientes hechos: los costos de adiestramiento y equipamiento por cada efectivo militar son de 22 180 colones; según los patrones establecidos en los primeros ocho meses de 1982, se realiza un promedio mensual de dos operativos de gran envergadura, con un costo promedio de 15.7 millones de colones. A ese ritmo se gastaron durante 1982, 377 millones; además de lo anterior, la guerra contra el FMLN ha exigido un promedio mensual de 4.3 operativos de menor envergadura, con un costo promedio de un millón de colones por operativo; esto significa que sólo en 1982 los operativos menores de las Fuerzas Armadas consumieron 52.5 millones; el presupuesto de salarios para mantenimiento del personal militar asignado a los ramos de Defensa y Seguridad Pública para 1982 alcanzó aproximadamente los 300 millones de colones (Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 1982: 14-15).

Son también ilustrativos de la carga financiera de la guerra los hechos siguientes: en el presupuesto nacional "el ramo de Defensa y Seguridad Pública absorbe 393 millones [...] aproximadamente un colón de cada cuatro de gasto [...] es dedicado directamente para financiar la guerra [...] si a lo anterior agregamos que en el presupuesto aparecen 385.7 millones para deuda pública [...] íntimamente ligada a costos directos e indirectos de la guerra [...] De cada 2.75 que se gastan uno tiene que ver con pago y sostenimiento de la guerra" (Lazo, 1983: 116-121). 6-121).

A pesar de todo lo anterior, los recursos financieros disponibles para el esfuerzo de guerra no parecen ser suficientes, así lo sugiere alguna evidencia disponible y también las declaraciones de algunos voceros militares (Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 1982). Existe evidencia de que las Fuerzas Armadas a nivel de sus bases han

establecido un sistema relativamente importante de “impuestos” o “contribuciones voluntarias”; por ejemplo, datos provenientes del ISTA permiten estimar contribuciones mensuales promedio de parte de las Cooperativas de Reforma Agraria de aproximadamente 2 300 colones, lo cual significaría ingresos adicionales para el esfuerzo de guerra de más de 9.2 millones (véase cuadro 7) (*ibid.*:cuadro 3). Informaciones del Banco Mundial señalan que por medio del INCAFE se están generando ingresos que pudieran sobrepasar los 300 millones de colones anuales, los cuales misteriosamente desaparecen sin dejar rastro contable y pudieran estarse destinando al financiamiento de la guerra (Banco Mundial, 1983).

Las crecientes dificultades y necesidades financieras del gobierno en el periodo 1979-1983 han sido satisfechas en dos formas diferentes: por medio de la expansión de crédito y de reducciones en el financiamiento a la empresa privada. En una primera etapa (1979-1980), por medio de la expansión del dinero y/o la creación de crédito. En este período, el crédito al sector público se incrementó 470% en 1979 y 329% en 1980, elevándose de 125 millones de colones en 1979 a 540 millones en 1980. La cantidad de dinero y casi-dinero crece como porcentaje del PIB del 26 al 28.5% en cifras absolutas, la cantidad de dinero y casi-dinero pasa de 2 414 millones. En esta primera etapa, el crédito al sector privado se ve, históricamente hablando, poco afectado por la expansión del crédito al gobierno por parte del BCR; los saldos de crédito en la cartera del sistema financiero alcanzaron los 2 813 millones de colones en 1979 y 3 244 en 1980. Cabe señalar que el crédito al sector privado crece en esos dos años a tasas del 16.6 y 15.3%, ambas superiores a la tasa promedio del período 1970-1978 (Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 1982: 20).

En la segunda fase, que se inicia en 1981 y continúa hasta el presente, las dificultades financieras del gobierno central continúan absorbiendo crédito del Banco Central, pero incursionando cada vez más en el terreno de la empresa privada. El BCR financia los faltantes del gobierno e implícitamente los requerimientos de la guerra, pero también comienza a asfixiar financieramente a la empresa privada. En 1981 el crédito al sector privado se redujo en 37 millones de colones (-2.2%), mientras el sector público incrementó su crédito en 848 millones. Durante 1982 los rasgos de esta segunda etapa se acentúan aún más como resultado de la intervención del FMI, que impone limitaciones a la expansión del crédito mediante la creación de dinero y/o casi-dinero. Entre diciembre de 1981 y diciembre de 1982 el Banco Central incrementó sus créditos al gobierno central en 388 millones de colones, mientras que las líneas de crédito destinadas al sector privado por medio de los bancos comerciales e hipotecario

CUADRO 7
 CONTRIBUCIONES A GASTOS DE SEGURIDAD DE MUESTRA
 DE COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO
 (en colones)

<i>Cooperativa</i>	<i>Gasto mensual</i>	<i>Gasto anual</i>	<i>Cuerpo de seguridad beneficiado</i>
San Francisco	1 250.00 1 680.00	23 400.00 20 160.00	1a. Brigada de Infantería Personal enviado por comandante local Aguilares
El Ángel	433.33	5 200.00	Defensa civil, Suchinango y Nejapa
Sta. María Las Mercedes	320.54	3 846.48	Defensa civil de Suchinango
El Guaje	86.66	1 040.00	Defensa civil Cantón Cuapa, Sto. Tomás.
Mapilapa	4 441.66	53 300.00	Defensa civil de Nejapa destacado en hacienda
Los Mangos Tutultepeque	6 066.66	72 800.00	Guardia Nacional de Aguilares Defensa civil de Guazapa destacada en hacienda
La Cabaña *	325.00 321.15	3 900.00 3 853.80	Defensa civil de El Paisnal Guardia Nacional destacada en ingenio La Cabaña
		3 948.05	Seguridad del ingenio La Cabaña
San Rafael *	1 733.33 3 900.00	20 800.00 46 800.00	Defensa civil de El Paisnal Defensa civil de El Paisnal, destacada en hacienda.
		9 045.44	Seguridad del ingenio La Cabaña
<i>Totales</i>	<i>21 256.33</i>	<i>270 093.77</i>	

* La Cabaña y San Rafael pagan 20 centavos por tonelada de entregada al ingenio.

FUENTE: ISTA, "Evaluación y Desarrollo Regional", San Salvador, 1982, cuadro 15-B.

sólo se incrementaron en 60 millones; para abril de 1983, los recursos del sector privado se han contraído en 32 millones de colones, mientras que el crédito al gobierno central se ha incrementado en 157 millones (*ibid.*).

En el plano político, el estrangulamiento financiero constituye una base sobre la cual se desarrollan y profundizan contradicciones entre la empresa privada y el proyecto político estadounidense. Sin lugar a dudas que el gobierno y Estados Unidos ven con preocupación los problemas arriba señalados y parecen haber articulado una estrategia para impedir mayores problemas que pongan en peligro la viabilidad de su proyecto. Las líneas principales de esta estrategia consisten en una mayor participación directa de Estados Unidos y las instituciones en las que tiene gran poder persuasivo, en el financiamiento del presupuesto nacional, el reforzamiento financiero del Banco Central para que mantenga o incremente los créditos a la empresa privada y, finalmente, se está estudiando una reforma tributaria que aumente los ingresos y disminuya los déficit del gobierno. Esta reforma tributaria no es, sin embargo, como las que en algunos momentos pasados se estudiaron y parcialmente se llegaron a implementar, las cuales perseguían introducir algunos grados de mayor justicia en el sistema tributario salvadoreño, aumentando los impuestos a quienes más capacidad de pago tenían. La actual reforma es, por así decirlo, una reforma de guerra que simplemente busca obtener dinero en donde políticamente sea más fácil, por lo cual se elevan las tarifas del impuesto de timbres y se tienen en perspectiva la elevación de otros impuesto selectivos al consumo e indirectos en general; todos esos gravámenes son de fácil recolección y golpean a sectores que no parecen formar parte de la alianza de clases que sirve de apoyo al proyecto político estadounidense y/o al gobierno de Unidad Nacional (Lazo, 1983).

3.4 El deterioro en las condiciones de vida

Durante el año pasado y el presente, el deterioro socioeconómico ha continuado a un ritmo bastante similar al de los tres años anteriores; sin embargo, los niveles alcanzados por las principales variables sugieren que el problema tiene, en el presente momento, niveles de profundidad y amplitud que de no ocurrir cambios drásticos en la situación y orientación del país pudiera comenzar a tener manifestaciones sociales y políticas de importancia. A juzgar por variables tales como los gastos de consumo de la población, los salarios reales de las diversas actividades, y los niveles de empleo y subempleo, la

clase trabajadora salvadoreña se encuentra en condiciones ya no sólo infrahumanas, sino también explosivas. Los sucesos económicos, políticos y militares ocurridos a partir de 1979 han afectado dramáticamente las condiciones de vida de los sectores populares; estos sectores son precisamente los que aún en condiciones normales tienen menor capacidad de resistir, dados sus bajos niveles de ingresos, su casi inexistente patrimonio y la relativa falta de organización. El carácter explosivo de estas condiciones se logra desmontar o desactivar en la medida en que no existen canales orgánicos que traduzcan el descontento popular en una acción reivindicativa y, también, en la medida en que el régimen continúa —a niveles aún mayores que en el pasado— derrochando intolerancia y represión ante cualquier tipo de acción reivindicativa que no controla. Por otro lado, durante 1982 y 1983 se comienza a percibir una ampliación del deterioro económico de sectores que en el pasado aún no habían sido afectados en forma significativa; entre éstos es necesario mencionar a los empleados públicos, los profesionales, los autoempleados y los sectores medios en general (Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 1982: 23-25; CIDAI, 1983).

El problema del deterioro social y económico no es sólo de carácter cuantitativo, es decir, no se puede entender con referencia solamente a las disminuciones en algunas variables que, se pudiera pensar, natural e inevitablemente disminuyen en un contexto de guerra y eventos poco favorables a la actividad económica salvadoreña. Sin lugar a dudas, las disminuciones en el consumo, el poder adquisitivo de los salarios, el empleo y demás variables son fenómenos relacionados con la guerra, la caída en los precios del café, la recesión e inflación mundial; eventos que en su mayoría no se le pueden achacar al gobierno de Unidad Nacional o al proyecto político que Estados Unidos patrocina en el país. Sin embargo, los sectores medios y la clase trabajadora parecen haber comprendido que entre el deterioro socioeconómico y las causas que se presentan como aparentes está de por medio la política económica, los criterios para distribuir pérdidas y ganancias y, en la base de todo, los intereses de clase que sustentan e inspiran al régimen que formula la política. En El Salvador de preguerra, cuando ocurría lo que se llama crecimiento económico, los intereses y criterios para formular la política económica colocaban a los sectores populares y a una gran parte de los sectores medios en el último lugar en el momento de la distribución de las ganancias y beneficios; a estos grupos de la población se les dejaba los últimos y se les daba lo menos posible. Ahora que la situación ha cambiado, que ya no hay crecimiento sino contracción, la política económica se formula como una imagen invertida de lo que era antes del conflicto;

los últimos de antes son ahora los primeros y, también, los que reciben más. El problema es que en las situaciones posteriores a 1979, lo que se distribuye por medio de la política son costos, pérdidas y la carga de una guerra que la clase trabajadora y los sectores medios no respaldan o si lo hacen no creen que pueda ser ganada por el régimen actual y las Fuerzas Armadas.

En un plano macroeconómico las principales evidencias del deterioro están relacionadas, en primera instancia, con el consumo de la población. Los gastos de consumo del salvadoreño promedio, ajustados por inflación, han disminuido en más de 27% durante el período 1979-1981 y al concluir 1983 se habrán reducido en un 20% adicional. A nivel agregado, el impacto conjunto de la inflación y los desensos en el ritmo de actividad económica sobre el consumo privado han sido más que evidentes: según fuentes oficiales, el consumo privado ha disminuido a una tasa promedio anual de 8.4% durante los años 1980-1982; para estos mismos años, el comportamiento del consumo per capita registró tasas negativas de 5, 12.7 y 12.9%, respectivamente (Banco Central de Reserva, 1982a: cuadro 1). Estas cifras, sin embargo, no revelan a cabalidad la dramática situación de consumo en que se encuentra la mayoría de los sectores populares que perciben ingresos considerablemente menores que el promedio nacional y que, por sus propensiones al consumo y la distribución de sus gastos, son perjudicados en mayor grado por la inflación.

Según estimaciones independientes, durante el período 1979-1983 ha ocurrido un incremento de 97.7% en el índice general de precios; existen, sin embargo, diferencias en el grado en que la inflación ha afectado diferentes tipos de bienes y servicios. El vestuario, calzado y los alimentos parecen ser los rubros donde más fuertemente se ha hecho sentir la inflación; el vestuario y el calzado han incrementado sus precios en casi 153% entre 1979 y 1983, los productos alimenticios incrementaron sus precios el mismo período en casi 122%. Los productos misceláneos, entre los que se incluye transporte, educación, salud, medicinas y productos sanitarios han incrementado sus precios en 98% durante los últimos 4 años (CIDAI, 1983).

Los datos anteriores sugieren con claridad que, en primer lugar, son los sectores de bajos ingresos —la clase trabajadora fundamentalmente— los que sufren el golpe más fuerte de la inflación. Aproximadamente el 63% de las familias salvadoreñas son de bajos ingresos y destinan entre 65 y 62% de sus gastos a la alimentación y adquisición de prendas de vestir y calzado; en cambio, las familias de altos ingresos destinan menos del 40% a adquirir estos productos. En la medida en que los precios de los alimentos, vestuario y calzado se han duplicado durante estos años de confrontación, los sectores de bajos ingre-

Los hogares se han visto obligados a reasignar sus escuálidos presupuestos para tratar de mantener el consumo real de estos rubros que se pueden considerar como prioritarios dentro de las necesidades básicas; el 63% de las familias salvadoreñas probablemente ha reducido o anulado sus asignaciones o gastos a rubros como el de vivienda y los llamados misceláneos, en un vano esfuerzo por mantener sus niveles de consumo de alimentos, vestuario y calzado, dado los ingresos tan bajos que poseen y lo elevado de las tasas de inflación (MINIPLAN-VIM, 1979).

Los sectores que pudieran llamarse medios, el 8% de la población con ingresos entre 600 y 1 000 colones, también han sido afectados por la inflación y se han visto obligados a reducir sus niveles de consumo. Aproximadamente un 50% del gasto de estos grupos se destina a adquirir alimentos, vestuario y calzado; el 9.3% del gasto se destina a vivienda, rubro cuyos precios se incrementan en 63% entre 1979-1983; finalmente, el 45% del gasto de las familias en este tramo medio se destina a productos misceláneos cuyos precios se han visto incrementar en 98% durante los últimos cuatro años (*ibid.*).

El deterioro del poder adquisitivo y los niveles de consumo de la población salvadoreña son el resultado de las acciones y omisiones de la política económica formulada durante el período. No obstante la continuada vigencia del Decreto 544 que establece el control sobre los precios de algunos bienes de consumo y servicios esenciales, el proceso inflacionario ha seguido deteriorando los ingresos reales de amplios sectores de la población salvadoreña cuya única fuente de ingreso está constituida por los sueldos y salarios que el mismo decreto mantiene congelados o, tal como últimamente se dispuso, permite incrementos simbólicos que no superan el 10% y están sujetos a la voluntad del patrono. Desde 1979 los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo se mantienen congelados y sujetos a la erosión que el proceso inflacionario impone. Al respecto, son importantes las conclusiones de un equipo técnico interministerial que señalaba los siguientes puntos: una alta proporción de establecimientos no respetan los precios regulados por el IRA para los granos básicos; las consultas médicas y odontológicas han aumentado su valor; únicamente 17% de establecimientos educativos cumplen con la congelación de colegiaturas; sin embargo, en lo relativo a salarios el 93% de las empresas cumplen con el decreto al no conceder incrementos (CIDAI, 1983).

Como resultado del Decreto 544 y la administración alcahueta del mismo, los salarios reales del sector público y privado han descendido a niveles primitivos e inaceptables de no ser por la falta de organización y el estado de terror en que se encuentran los trabajadores salvadoreños. Según estimaciones independientes, el salario mínimo real ha disminuido en 65% entre 1979 y principios de 1983; los sueldos de

los empleados públicos han caído en más de 45% durante el mismo período. Otras informaciones apoyan también la idea de la disminución en salarios reales: el Instituto Salvadoreño del Seguro Social reporta que los salarios reales del trabajador típico cotizante han disminuido en casi 7% durante 1980-1982 (*ibid.*).

La verdadera naturaleza de la política económica se percibe con bastante claridad al analizar los argumentos esgrimidos en contra de las diversas peticiones y exigencias de derogación de la Ley de Estabilización Económica y/o de la concesión de incrementos obligatorios de salarios: dichas medidas, según el gobierno, darían un fuerte impulso a la inflación ya que incrementan sustancialmente los costos de las empresas. Sin embargo, informaciones oficiales señalan que los salarios tienen un escaso peso en el valor bruto de la producción y en la conformación de los precios, por lo cual un aumento parejo y obligatorio del 10% en los salarios provocaría solamente un incremento de 2.4% en el nivel de precios; los incrementos en los precios de tal medida serían mayores en el sector construcción, donde alcanzarían el 4% (*ibid.*). Al respecto, un equipo de los ministerios de Planificación, Economía, Agricultura y Trabajo señalaba que desde una perspectiva económica “los aumentos en los costos ocasionados por ajustes en los salarios que fluctúen entre el 5 y el 15% no debería afectar mayormente el nivel de precios [...] muy por el contrario, es de esperar que un aumento en las remuneraciones estimularía más la muy contraída demanda y la producción de los precios.” (*ibid.*). Estas medidas son acertadas desde una perspectiva de tiempos de paz, en los cuales la política económica tiene como tarea principal estimular la demanda y la producción. Desde una perspectiva de guerra, que es la dominante en la formulación de la política a partir de 1982, la recomendación es improcedente ya que el Estado no está interesado en mantener o, mucho menos, incrementar la demanda de los sectores populares y/o la producción nacional destinada a satisfacer estas necesidades. En tiempos de guerra, tal como se señaló, “los recursos humanos y materiales de un país son reasignados hacia actividades diferentes y el centro de interés cambia. En la guerra la preocupación fundamental es cuánto se puede destinar para uso inmediato en el proceso de guerra. La medida por excelencia es la reducción en el consumo personal” (Pigou, 1952).

Las condiciones de vida de la población también se han visto afectadas por las disminuciones en el empleo del sector público y privado. Según las estadísticas oficiales, en 1979 existía solamente un 8% de desempleo abierto; el 92% restante de la población económicamente activa tenía algún tipo de trabajo. Del total de ocupados, sin embargo, 51% tenía empleos de tiempo parcial o que generaban pagos

inferiores al salario mínimo. A principios de 1983 la situación ha empeorado marcadamente: el desempleo abierto es de 38% y la tasa de subempleo, los que no trabajan un tiempo suficiente y/o perciben salarios inferiores al mínimo, se ha elevado a casi 80% (CIDAI, 1983).

Informaciones fragmentarias provenientes de la prensa nacional parecen confirmar la gravedad del problema del empleo: los empresarios de oriente han manifestado que el comercio y la industria de la zona sólo han logrado trabajar entre 55 y 60% de los días laborales durante 1982 y 1983; la industria textil reporta que sus volúmenes de empleo a principios de este año sólo alcanzan el 60% de los volúmenes previos al conflicto; sólo el 47% de los telares continúan funcionando; la demanda de mano de obra originada en el cultivo de algodón disminuirá en casi 500 000 personas durante la actual cosecha.²

Además de los deterioros económicos, se pueden mencionar otros sucesos ocurridos durante los dos últimos años que ciertamente afectan la calidad de la vida del pueblo salvadoreño, especialmente de los sectores urbanos, los cuales también señalan la conversión de la política económica en un puntal de guerra. El sistema de salud pública y el mismo sistema del seguro social, nunca conocidos por su eficiencia, se han deteriorado en un alto grado: se reportan 31 centros de salud paralizados: faltan medicinas en las instituciones de salud pública y se ha comenzado a cobrar por los servicios prestados: la red de hospitales nacionales ha experimentado recortes en sus presupuestos nominales del 5%, y 38% en términos reales, durante los dos últimos años. Aún más grave, las asignaciones dentro de los hospitales nacionales para adquirir medicinas, se han reducido en 27.7%. Los servicios de educación prestados por el Estado también se han afectado por la lógica de la guerra y las prioridades financieras que de ella se derivan; igual suerte han corrido los servicios prestados por el Estado mediante instituciones como el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría de Pobres, el Ministerio de Trabajo y muchas otras más.³

Tienen especial significado las reducciones en el presupuesto del ramo de agricultura ya que afecta severamente al programa de Reforma Agraria, el mecanismo con mayor potencial para contribuir a resolver los problemas fundamentales del pueblo salvadoreño. Tal como se ha señalado, "si para la Junta de Gobierno que concluyó su gestión en abril de 1982 el proyecto de Reforma Agraria se revelaba como prioritario, a juzgar por asignaciones (presupuestarias), para el Gobierno

² *La Prensa Gráfica*, 1 de junio de 1983, p. 2; 9 de junio de 1983, p. 2.

³ CIDAI (1983). Seminario de Graduación, "El ISSS como mecanismo de financiamiento de salud", documento inédito presentado al Seminario de Graduación de Departamento de Economía, UCA, junio de 1983, cuadros 10-12.

de Unidad Nacional parece haber dejado de serlo" (CIDAI, 1983).

4. Conclusiones

A juzgar por la situación económica, El Salvador se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su historia. Diversos indicadores macroeconómicos señalan que el país ha retrocedido, como mínimo, veinte años en su proceso de crecimiento. La prolongación de la guerra y los crecientes niveles de destrucción que conlleva están acercando aceleradamente al país a una situación límite. Los descensos en la producción de granos básicos, el estrangulamiento de divisas que se deriva en parte de la precaria situación de los productos de exportación, la destrucción de cosechas por parte de ambos bandos y la destrucción ecológica del país por efectos de la guerra, amenazan con hambrunas generalizadas. Por otra parte, los estrangulamientos financieros internos unidos a la casi total pérdida de confianza por parte de la empresa privada están provocando disminuciones en el acervo de capital o activos fijos productivos, lo cual no sólo afecta la producción sino la capacidad productiva, disminuyendo las posibilidades de reconstrucción en el momento que termine el actual conflicto.

La falta de confianza que la empresa privada parece tener en la conducción política y militar, junto con las exigencias de algunos sacrificios, por mínimos que sean, tenderá a profundizar aún más las contradicciones entre estos sectores, exacerbando la fragilidad del actual arreglo político y generando serias dificultades para la implementación de las nuevas políticas económicas.

Las posibilidades de revertir el deterioro económico se han vuelto aún más remotas a partir de 1982, como resultado de la ampliación y profundización de la guerra, el aferramiento a esquemas militaristas de solución por parte del régimen salvadoreño y EU y, consecuentemente con lo anterior, también se han reducido las posibilidades de instrumentalizar la política de recursos económicos en función de la guerra. El esquema económico y la política que de él se deriva, se vuelven, a partir de 1982, parte integral y subordinada de la estrategia político-militar que busca la aniquilación del movimiento popular. Ya no interesa la producción, el empleo, el consumo o el incremento de los activos fijos de la nación; lo fundamental es la reasignación de recursos reales y financieros en forma tal que se fortalezca la maquinaria bélica. A nuestro juicio, esta lógica de guerra está contribuyendo sustancialmente al deterioro económico y social de El Salvador.

A juzgar por la evidencia, el esquema de economía de guerra tiene pocas posibilidades de contribuir a reactivar al economía y/o definir la guerra en forma favorable a las Fuerzas Armadas y Estados Unidos. Esto se entiende a partir del poco apoyo e incluso boicot que la empresa privada realiza al esquema de economía de guerra, mediante la fuga de capitales y la pugna por los recursos del sistema financiero. El fracaso de la economía de guerra también está determinado por el carácter subdesarrollado y dependiente de la economía nacional; y también por el hecho de que el FMLN parece haberse percatado de la instrumentalización en que el régimen intenta hacer de lo económico, por lo cual, con fuerza cada vez mayor, impulsa una campaña de sabotajes que acentúan los estrangulamientos de divisas y financiero.

Bibliografía

- Banco Central de Reserva: (1982), "Programa monetario 1983", San Salvador, diciembre.
- Banco Central de Reserva: (1983), Sección de Cuentas Nacionales, *Estadísticas Internas*, junio.
- Banco Mundial: (1983), "El Salvador Updating Economic Memorandum", reporte núm. 4054-ES, Washington.
- Boletín de Ciencias Económicas y Sociales: (1982), "Esquema de análisis de la situación económica", documento de trabajo, núm. 22/11/82-016.
- CIDAI: (1983), "Consideraciones sobre el presupuesto general de la nación, 1983", en *Proceso*, núm. 96, El Salvador, UCA.
- CUDI: (1983), "La guerra civil: elementos para su análisis" en *Estudios Centroamericanos* (ECA), núm. 411, San Salvador.
- Johnson, Harry G.: (1976), "Towards a General Theory of the Balance of Payments" en S. Frenes *et al.*, *The Monetary Approach to the Balance of Payments*, Londres.
- Junta Monetaria: (1982), Memorandum PT-45/82, San Salvador, 24 de junio.
- Lazo, F.: (1983), "El nuevo paquete de impuestos", en *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, San Salvador, marzo-abril.
- MINIPLAN-BCR-DIGESTYC: (1978), *Estructura del gasto familiar*, San Salvador.

- MINIPLAN-VIM: (1979), *Algunos resultados de la encuesta nacional de presupuestos familiares*, San Salvador.
- Meade, J. E.: (1963), *The theory of International Economic Policy*, v. 1, Nueva York.
- Pigou, A. C.: (1952), "The Political Economy of War", en P. Samuelson *et al.*, *Readings in Economics*, Nueva York.
- The Council of Economic Advisers: (1952), "Economics of Defense Mobilization", en P. Samuelson *et al.*, *Readings in Economics*, Nueva York.